

Latinoamérica:

Con o Sin Pandemia, la Protesta esta a la Vuelta de la Esquina

Dr. Mladen Yopo H. (*)

Vivimos un escenario de extrema incertidumbre y desconfianza, de deconstrucción de los imaginarios y espacios, un punto de inflexión crítica de la humanidad con el coronavirus (Covid 19). El Secretario General de la Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo que el Covid “es la crisis más retadora que hemos enfrentado desde la II Guerra Mundial” al tratarse de una combinación de una enfermedad que amenaza a todos y porqué tiene un impacto económico que traerá una recesión sin precedentes. Sin embargo, creo que se queda un poco corto, porque no solo ha desatado efectos negativos sino que ha potenciado problemas que estaban antes de la pandemia en un contexto internacional complejo, en cambio, interpelado y con liderazgos sin capacidad de ordenamiento y respuestas, en un momento en que la amplia agenda de amenazas más que nunca necesita de una agenda multilateral, cooperativa y de una soberanía inteligente (más universal) para tratar temas globales como el calentamiento, el crimen organizado o las inmigraciones, entre otros.

En este escenario sin certeza de futuro, parece correcto anclar la pandemia como un acelerante de la historia como dijo Richard Hass, presidente del Council of Foreign Relations, al empalmarse la misma con otros desafíos, tragedias y conflictos. Es decir, la pandemia y sus efectos se unen a temas no asumidos y/o resueltos como el calentamiento global y las catástrofes naturales, los desafíos de gobernabilidad democráticos (corrupción, falta de representación, pobreza, desigualdad, exclusión, racismo, trabajo precario, hambre, inseguridad, etc.) y que causaron el 2019 enormes protestas en todo el globo y que hoy están solo en un interludio esperando florecer como se demuestra en los recientes disturbios en Francia, EE.UU., Israel, Mali, Brasil o Chile. Agregamos a esta larga listas de desafíos, entre otros, los conflictos armados en Siria-Medio Oriente, norte de África (Libia) o Asia (Armenia y Azerbaiyán), las escaramuzas simbólicas o “guerras de tolerancia” en zonas beligerantes (mar de China o el Himalaya) o las grandes masas migratorias producto de desafíos económicos e inseguridades (ej. Oxfam habla de millones al borde de la hambruna en un mundo de abundancia) y que se encuentran con la represión de la xenofobia y el racismo.

La crisis sanitaria

El Covid ha expresado y potenciado una crisis profunda y multidimensional para la humanidad, para un escenario internacional sin patronajes monopólicos y de fuerzas centrífugas, y para el capitalismo dominante de la globalización y su modelo de acumulación (por ejemplo, la presión y desesperación popular en Chile permitió la aprobación en la Cámara de Diputados la posibilidad de retirar el 10% de los ahorros en la AFP, uno de los pilares básicos e intocables del modelo neoliberal y del poder económico). En el caso de América Latina y en otras partes del mundo postergado, esta pandemia ha creado las condiciones para una “tormenta de ingobernabilidad perfecta”. Primero, porqué es una crisis sanitaria global producida por un virus desconocido de rápida y amplia propagación en este mundo de interdependencia sin precedente como decía Henry Kissinger, de alta mortalidad y con gran descoordinación internacional para enfrentarla producto de lo inesperado e impactante y de una mayor debilidad del multilateralismo con el surgimiento de liderazgos nacionalistas transaccionales. Como dijo el Dr. Lee, director de la división de enfermedades contagiosas de

Singapur “las enfermedades no respetan fronteras, por lo que el mundo es tan bueno como lo sea su eslabón más débil”.

Hasta principio de julio se habían confirmado más de 13.8 millones de contagio y casi 600 mil muertos, consolidándose América Latina y el Caribe como la región más afectada por una pandemia aún descontrolada producto de la precariedad de la salud pública y de un economicismo “irracional” prevaleciente que demoró los confinamientos. Se le comparó a la gripe española de 1918 y se le atribuyó parentesco con el virus Sars (2002) y el Mers (2012), pero como dice la revista medica The Lancet, no hay evidencia clara de su comportamiento, ni siquiera de la inmunidad de los sanados (más de 6.5 millones). Tampoco hay vacuna (hay unos 160 proyectos, 17 avanzadas testeándose en humanos) y los antivirales usados tienen una efectividad relativa como el Remdesivir o la controvertida hidroxycloquina. Solo en los recientes meses se sabe algo más de su capacidad de mutación, incidencias o resistencia (la Organización Mundial de la Salud – OMS reconoció recién que podía transmitirse vía aérea). Más aún, muchos gobiernos no han hecho los test o la trazabilidad necesaria (por voluntad o incapacidad institucional y/o financiera) para tener información fidedigna o han hecho un manejo político buscando minimizar sus efectos (sin contar los negacionistas como Trump o Bolsonaro que tienen la pandemia desatada). El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió hace poco que lo peor está por venir y un estudio de la Universidad de Harvard pronosticó que podría durar hasta el 2024, lo que da un “pronóstico reservado” ante las incertezas.

Su impacto económico-social

Un segundo tema, es el del “darwinismo social” que ha mostrado con brutalidad en el mundo y la región esta pandemia, ese del que habla el filósofo Michael Sanders, donde las principales víctimas son pobres (pensemos en Guayas – Ecuador y el número de muertos o San Ramón o Cerro Navia en Santiago/Chile con la mayor tasa de muertos por cada 100 mil habitantes o la consternación que han causado los muertos en las calles de Cochabamba y La Paz por la saturación hospitalaria), los viejos o las personas con enfermedades preexistentes (en más de algún lugar de Nueva York, Brasil o Chile hubo que elegir quien vivía) o los olvidados (presos, sin casa, indocumentados, refugiados, tribus alejadas). Esta amenaza, que se va transformando en una crisis humanitaria, este darwinismo social, sin embargo, no es solo un tema de los países más pobres al vivir el 62% de las personas necesitadas en países de renta media.

Una tercera tendencia inducida por esta crisis sanitaria, es una tremenda crisis económica con gran impacto social (en Israel ya van más de 1 millón de cesantes y las empresas y los “autónomos” tienen un 40% de su ingreso). En medio de una guerra comercial/hegemónica entre los gigantes de la economía mundial (EE.UU. y China) y una desaceleración de la economía internacional previa al virus, el mundo ha ralentizado (o detenido en algunos casos) sus intercambios con los cierres de mercados, ruptura de cadenas de producción por los cierres de fronteras (las tecnológicas como el G5 ya estaban limitadas por temas de seguridad) y de la producción interna con las limitaciones de la demanda y oferta con las cuarentenas. Ello no solo ha redundado en impactos negativos en las bolsas, sino y más grave en una cesantía galopante, realidad que ha llevado a todos los expertos a hablar de una crisis igual o peor a la gran recesión de 1929, tal como lo afirma Uri Friedman en la revista The Atlantic.

Un informe del Banco Mundial (BM) de junio preveía que la economía mundial en el 2020 decrecería en un 5.2%, declaraba que la actividad de las economías avanzadas se contraería un 7 %, la calificaba como la peor desde la II Guerra Mundial y acentuaba que por primera vez desde 1870

tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Esto es particularmente grave si mirando los niveles de dependencia de la América Latina de los mercados desarrollados para la exportación de sus commodities. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una recesión de 9.4% en el 2020 y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de la ONU (CEPAL) habla de 8.5 millones de empleos perdidos y del hundimiento de 2.7 millones de empresas. No hay que olvidar que más del 50% de la fuerza laboral en la región es informal, y las pequeñas y medianas empresas representan el 97% del tejido empresarial y las dos terceras partes del empleo; es decir es una región de empleo precarizado con poca capacidad de resistencia ante crisis como la actual. Esto, como lo alerta la ONU, aumentará los pobres en unos 45 millones más, es decir uno de cada tres latinoamericanos será pobre dice la CEPAL, sumándose el hambre, como lo constata en julio la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la que dice que el hambre afectó a cerca de 47,7 millones de latinoamericanos y caribeños (7,4%) en 2019, cifra que podría subir al 9,5% al 2030 tras los efectos de la pandemia (y eso que se pierde o desperdicia un tercio de los alimentos producidos en el mundo).

Sin embargo, por la complejidad y cantidad de variables de la ecuación descrita, aún es prematuro predecir su profundidad, extensión y duración de la crisis. Como dice Inma Puig "es difícil predecir el futuro desde un presente condicionado por el pasado". Es decir, sus parámetros son aún desconocidos incluso si miramos los actuales indicadores socio-económicos y/o variables internacionales como el aislacionismo de muros y el sálvese quien pueda que adoptaron importantes países desde una mirada nacionalista para palear el virus y la incertidumbre estratégica (un fortalecimiento de las fronteras dirían Cooley y Nexon o de mentalidad tribal de J.C. Vásquez) y que seguro tendrá repercusiones en la futura seguridad nacional de los mismos (ej. limitar la importación de productos por las vulnerabilidades estratégicas), las limitaciones impuestas por las presentes disputas hegemónicas globales (China con EE.UU., Europa e India o entre los propios socios de Occidente como Eurora-EE.UU.) y los previsibles cambios de patrones de producción (posible sustitución de importaciones para palear desempleo y déficit, fomentar la reactivación económica, amén del propio desarrollo de estándares internos) y del consumo teniendo presente inseguridades y razones económicas como falta de empleo, salario digno o miedo a nuevas crisis.

Por lo mismo, Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL, dijo hace poco que "estamos en el riesgo de una nueva década perdida" en la región (el PIB en Perú cayó en mayo un 31%). Esto es particularmente realista si más encima miramos que desde antes de la pandemia América Latina y el Caribe ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019 o que este último año sus exportaciones habían caído un 2% producto de la competencia o la desaceleración de motores como China (país que por primera vez no se fija una meta de crecimiento). Complementa este oscuro panorama otro lastre económico, la deuda externa de la región. A fines de mayo escribía Isabella Cota que, según los datos recientes del BM, la región sumaba US\$ 1,87 billones de deuda externa en 2018 y el FMI antes de la llegada de esta catástrofe sanitaria, advertía de los grandes riesgos de la misma. Lo malo es que para muchos de estos países, endeudarse es la única opción que tienen para asegurar que sus ciudadanos tengan lo necesario mientras el virus impide la producción y el trabajo remunerado en este mundo "confinado".

Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del BM dice que "las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y plantee complejos desafíos mundiales". Entre estos está con seguridad, al hacer el balance del comportamiento de los países, del modelo prevaleciente en ellos (ej. capacidad y acceso a bienes públicos universales como el sanitario) y de las decisiones tomadas a partir del número de

contagios, fallecidos u económicos, las que tendrá un impacto político-judicial. Dado los datos que se manejan, no cabe dudas que habrá recriminaciones a varios gobiernos por la inacción, lentitud, parcialidad de las medidas y sus costos en vidas y económicos (ya hay demandas en la justicia como en el caso de Chile o el reinicio de protestas en este y otros países de la región). Recientemente, por ejemplo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, tuvo que renovar a más de la mitad de su gabinete en medio de una caída de popularidad y una creciente crisis económica debido a la larga cuarentena en busca de frenar el virus (Perú ocupa el quinto lugar con más de 338.000 contagios).

Lo que sí está claro en este momento, es que el mejor manejo sanitario y social se ha dado aquellos países con un Estado socialmente activo y con líderes transformadores (ej. ahí están las lideresas de Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Alemania, etc.), versus aquellos Estados donde ha primado más el "laissez faire" (poder) del mercado y los líderes transaccionales como Trump con 3.5 millones de contagiados y casi 140 mil muertos (particularmente el Estado de La Florida que supera a España e Italia en el número de contagios), Bolsonaro más de 2 millones de contagios y 77 mil muertos, y el Reino Unido e Johnson en el tercer lugar con más de 45 mil muertos. En la región se reconoce mérito al manejo de la pandemia a países como Uruguay, Costa Rica, Paraguay y Argentina.

La interpelación política

A pesar del respiro político que le ha dado la pandemia a gobiernos como el de Iván Duque en Colombia, ella unida a la crisis económico-social, con sus varios meses de confinamiento de unas poblaciones resistiendo con escasa o nula ayuda, sin duda ahondará la crisis de la gobernabilidad democrática (y de su sistema de partidos) que se venía manifestando el 2019 con la ola de protestas, incluso en países con escasa tradición de movilización social como Colombia por su largo conflicto armado interno. Razones para ello hay de sobras. Pensemos que en un poco más de diez años (desde la quiebra de Lehman Brothers el 2008) el mundo pasó a estar más preocupado por la inestabilidad o caída de las democracias que por nuevos colapsos financieros, y eso solo tuvo una pausa con la pandemia. Pero desesperados y desesperanzados, internalizado el virus como una nueva normalidad, con el aprendizaje de la movilización y con la incapacidad de la mayoría de los gobernantes para dar respuestas aceptables a un arcoíris de demandas sociales acentuadas y ahora con problemas reales de caja de pago, la protesta y movilización volverá con una versión 2.0.

En la región se vive desde hace tiempo la ausencia de relatos inspiradores y coherentes con los verdaderos intereses de los soberanos, donde ni el gobierno o la oposición de turno y sus instrumentos, los partidos políticos tradicionales (salvo excepciones), han logrado consolidarse como reales opciones de futuro. En política, la representación es el acto mediante el cual un representante actúa en nombre de un representado para la canalización de sus intereses a la vez de ser motor de nuevas propuestas. Eliane Brum, por ejemplo, ha dicho que "en un año y medio de gobierno, Jair Bolsonaro destruye el país construyendo un presente hecho de diferentes partes de su peor pasado...", rodeado de militares (incluyendo el ministro de Salud) y arrinconando a los funcionarios civiles y lo peor (dice) es que es un proceso en construcción que avanza, yo diría peligrosamente no solo para su país sino para todo el contorno regional. Un botón de muestra esto, como lo constatan Jornal Opcao y la web Brasil 247, es el hecho de que Bolsonaro mandará al Congreso una nueva política de defensa donde declara que Sudamérica ya no es una subcontinente libre de conflicto y resalta la posibilidad de tensiones y conflictos en el entorno estratégico. Ello, entre otros, además de favorecer las tendencias armamentistas, la presencia militar/autoritaria y la desconfianza, aumenta la posibilidad de conflicto y limita las posibilidades de cooperación e

integración y las sinergias necesarias para enfrentar este mundo incierto en una región que comparte visiones y dilemas comunes.

Muchos gobiernos claramente no han estado a la altura de los desafíos/demandas ciudadanas en esta pandemia. Hoy hay claramente una orfandad política a partir de la obsolescencia de los partidos conservadores con el explosivo cambio en el mundo actual (derechos universales, niveles educacionales, de conexión) y sus impactos en la realidad e imaginario de las personas quienes exigen seguridades básicas y oportunidades. Y, en el otro, por la pérdida en los partidos de centro e izquierda de las convicciones transformadoras al amalgamarse con las elites dominantes (fueron cooptados por el capital) en el marco del modelo y discurso triunfante pos Guerra Fría (el famoso Consenso de Washington y de un mercado imperfecto y concentrado). De esta forma, la tercera oleada democrática y a pesar de los chorreos económicos que trajo en la era dorada (democracia más crecimiento), no trajo consigo una mayor igualdad en la región, aquella estrella que Nolberto Bobbio consideraba otrora el punto nodal de la separación entre las corrientes de derecha y las de izquierda. No nos olvidemos que en el caso de América Latina y como lo registra el informe de Desarrollo Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región del mundo (37%) y viceversa: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%).

Esto, al final, ha terminado desprestigiando aún más la política al convertir a todos sus representantes en lo mismo, teniendo como resultado una alta deslegitimación de los partidos y el sistema de partidos (más de alguno reducido a “protopartidos” o con alta fragmentación de representaciones, baja participación electoral), ha generado liderazgos débiles (algunos populistas conservadores provenientes del mundo autoritario y/o evangélico) y gobierno inestables, y ha trasladado la representación a una ciudadanía entrelazada en las redes y algunos movimientos sociales de diverso anclaje pero interpeladores del sistema en esencia y con la movilización en su ADN. En todos estos y como lo expresó el movimiento político Compromiso Social cercano al ex presidente Correa de Ecuador el año pasado, por ejemplo, no hay banderas políticas (partidistas), en las calles han estado estudiantes, maestros, campesinos, indígenas, ecologistas, amas de casa, transportistas, pequeños productores, empleados públicos, comerciantes y el pueblo en general. Los ciudadanos crecientemente sienten que deben ser ellos los que velan por sus intereses, incluso en países como México y Brasil donde en un principio canalizaron su sentimiento anti status quo a través de las elecciones de AMLO y Bolsonaro.

La revista conservadora National Review en su análisis del fracaso de Piñera en Chile (tiene entre 12 y 20% de apoyo dependiendo de la encuesta) y que perfecta podría haber estado hablando de Macri en Argentina, destacaba la absoluta desconexión con las personas que intentaba gobernar. Decía que “en apariencia, los cálculos de Piñera eran impecables. Las medidas duras acabarían rápidamente con el virus y la economía se reactivaría en paz. Pero el gobierno chileno se encontró de golpe con un problema muy simple: atrapados en barrios sobrepoblados, los pobres chilenos no podían darse el lujo de quedarse en casa. Al final, la pobreza, el hacinamiento y una fuerza laboral informal masiva superó la respuesta del gobierno. Hoy, Chile tiene una de las tasas de infección per cápita más altas del mundo, y su alguna vez aplaudido ministro de Salud fue obligado a renunciar”. Pero más allá de la desconexión, el problema de este tipo de gobernantes es bastante mayor al estar atrapados en un egocentrismo y en una la ideología económica transaccional per se, donde temas sanitarios pasan aunque sea inconscientemente a segundo plano a pesar de la ciencia, terminando por las críticas sociales incluso de su propio entorno ideológico por la gravedad e

impacto de la crisis. Así, por ejemplo, el alcalde de ciudad chilena de Calama (al norte de Santiago) también de derecha, acusó que “el gobierno privilegió mantener la producción minera cueste lo que cueste, por sobre una mirada sanitaria” y dijo que su comuna se había convertido en un “Clúster epidemiológico”.

El retorno de las protestas

Además del surgimiento de innumerables democracias autoritarias y/o autocráticas en los últimos años (Trump, Bolsonaro, Duterte, Putin, Xi Jinping, Ortega y otros), el malestar y las revueltas populares el 2019 marcaron un signo inequívoco de la época y solo se “durmieron” o entraron en hibernación con el virus. Como dijo Cristopher Guilluy, por ejemplo, “hace un año, las clases populares y medias de la Francia periférica se reunieron...para emprender el movimiento social más prolongado de la historia. La revuelta de los chalecos amarillos, producto de la globalización (con su anti keynesianismo visceral) y la desafiliación política y cultural, hizo visibles a los perdedores de la globalización”, hablaba de esos 3.800 millones que tienen menos dinero que los 26 más ricos del mundo develando la gran concentración del capital en el mundo de hoy (45% de la riqueza mundial esta en manos del 1%). El movimiento en Francia comenzó entre unas pocas personas del área rural de clase media y baja, un sector que protestaba en contra de un nuevo impuesto ecológico sobre el combustible que creían que llevaría sus presupuestos al límite, pero seguidamente afloraron anhelos y necesidades negadas a obreros, empleados, jóvenes, trabajadores y cesantes, jubilados, los sin casa, inmigrantes y otros, que rápidamente se unieron en el renacimiento de una Francia popular dormida e invisibilizada reclamando una verdadera “liberté, égalité y fraternité” que diera oportunidades y pusiera fin al abuso: esa justicia social para los menos aventajados de la que habla John Rawls. Esto explica, en parte, el contundente triunfo de los verdes en las recientes elecciones municipales en Francia y el posterior cambio de agenda del presidente Macrón hacia una más ecológica-social.

En Ecuador las protestas fueron iniciadas con el alza de los combustibles, en Chile por una mínima alza del metro (tren subterráneo), en Colombia por el mercado del trabajo y el sistema de pensiones, en Brasil por el medioambiente y las medidas represivas (incluyendo ejecuciones extrajudiciales) y económicas antipopulares, etc. Ellas recorrieron persistentemente geografías y paisajes muy diversos el año pasado, incluso con movilizaciones y protestas violentas, las que mostraron ser un método efectivo para empujar transformaciones necesarias al desestabilizar un dominio político, cultural y económico que las ha subyugado, borrado como decía Daniel Matamala. Es la necesidad presente y urgente de un cambio hacia una democracia más inclusiva y un paradigma distinto más justo, digno y armónico con las personas y su entorno. Lo claro, es que ante la voluntad de reducir el Estado y de privatizar todo en función de un proceso de acumulación primario como se ha hecho en Chile, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Brasil, los sectores populares y medios han puesto por delante la necesidad de preservar el bien común y los bienes públicos; ante la voluntad de desregular y desnacionalizar, proponen un marco nacional que condiciona la defensa del bien común nacional (particularmente de recurso no renovables o en peligro); ante el mito de la hipermovilidad del trabajo (flexibilidad le llaman ahora), apuestan por un mundo laboral más estable y más duradero (no eterno) pero digno en trato y salario; ante la construcción de un mundo de indiferenciación cultural, plantean un capital cultural protector e inclusivo de la diversidad (lo de todos, la comunidad), etc.

En la sociedad del coronavirus, sin embargo, muchos de sus gobernantes parecen creer que el triunfador en política sanitaria será el verdugo en política económica y eso ha conducido a la

parálisis, la negligencia o el autoritarismo. Así, muchos gobiernos cuestionados, autoritario-conservadores o de signo populista de izquierda y de derecha, han usado la amenaza de la pandemia para fortalecer el control de la sociedad, de sus demandas y movilizaciones, a través de la promulgación de estados de excepción que limitan la libertad con toques de queda, cuarentenas y confinamientos; haciendo uso de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, las mismas que sacaron a las calles para tratar de apaciguar las protestas; anulando y/o silenciando con el discurso del miedo a las oposiciones políticas y sociales o gremiales; limitando el contrapeso necesario del Congreso al presionarlo para aprobar leyes con suma urgencia (ej. paquetes económicos que a veces terminan ayudando más a los ricos que a los pobres o leyes de vigilancias reñidas con la libertad); alineando en esta pseudo “guerra” sanitaria a los medios de comunicación con la versión oficial por muy porosa o limitada que esta sea, haciéndolos perder su responsabilidad profesional y ética para convertirse en correa de transmisión de la disciplina y el orden público en momento de crisis (los voceros oficiales han copado los espacios comunicacionales e impuesto un discurso hegemónico); presentando en más de una ocasión parte del modelo de vigilancia autoritaria como modelo “exitoso” para combatir este tipo de crisis con la inteligencia artificial, cámaras, big data y que infringen claras violaciones a las libertades individuales; e incluso suspendiendo o recalenderizando actos electorales o plebiscitarios de tremenda relevancia (ahí están Bolivia y Chile entre otros). Al final, parafraseando a Natalia Peritore estamos viviendo en la región “un (claro) desequilibrio en la relación entre la seguridad y la libertad” con efectos perniciosos para la propia democracia.

Las protestas “desacreditadas” por el poder conservador llamándolas radicales o populistas (aunque sus peticiones sean democráticas, normales y legales en la inmensa mayoría de los países europeos por ejemplo), han hecho de que en la región se hable con cierta frecuencia sobre el peligro que padece la democracia y de la posibilidad de regreso de las ideologías totalitarias del siglo XX como forma de control por el miedo. Y algo de esto hay en el marco de la debilidad de los gobiernos para mantener una gobernabilidad elitista (las movilizaciones amenazan con ser el némesis de algunos gobernantes). En esta línea, el profesor de la Universidad de Cornell, Gustavo A. Flores-Macías, por ejemplo, resaltaba a principios de año en *The New York Times* la gran influencia política ganada por las FF.AA. en la región. Dice que en Brasil, los militares ocupan la mitad del gabinete de Bolsonaro. En México los soldados están a cargo de la seguridad interior y la construcción de importantes proyectos de infraestructura. En El Salvador y Nicaragua, los presidentes se apoyan en las FF.AA. para intimidar a rivales políticos. En los últimos años, los presidentes de Chile y Ecuador han echado mano de los militares para desactivar las protestas. En Bolivia, las FF.AA. desempeñaron un papel importante en la renuncia de Evo Morales al quitarle su apoyo. Finaliza diciendo que “el protagonismo del ejército en asuntos públicos es especialmente preocupante por su terrible legado de represión y autoritarismo en la región”. Parafraseando a Antonio Gramsci, entonces, “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Pero claramente esos monstruos se encuentran con un contexto muy cambiado y a pesar de que el peligro existe, es una hipótesis limitada por diversos factores de los tiempos nacionales e internacionales. Igual este uso o posible florecimiento autoritario, no resolverá la crisis o llevará a la pacificación interna de los países. La gente está empoderada (entre otros, ya le tiene menos miedo a las FF.AA. y se piensan así asimismos como actores activos, “dependemos de nosotros” y, por lo mismo, la solución del conflicto solo es posible con la reintegración política, económica y cultural de la gente corriente, los de abajo y del lado, con un nuevo contrato social aludiendo a Rousseau.

Es una falacia la tentación de los gobiernos de pensar que podrán seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras y sectores populares, a los asalariados y profesionales medios, mientras favorecen a sectores pudientes empresariales nacionales y transnacionales tal como lo expresa la National Review, al decir que “las reformas de Piñera demostraron ser eficientes pero desproporcionadamente beneficiosas para los más adinerados”. Esto ha llevado a la gente a decir que “el gobierno no está actuando en beneficio de la mayoría”, siente que el poder está nuevamente corporativizado, en manos y en favor de unos pocos y en decadencia. Gran parte de los liderazgos en la región son del tipo transaccional de capacidades abstractas pero carentes de paradigmas y convicciones transformadoras (sentido de estadista) y, por lo mismo, incapaces de leer un malestar profundo que crece en las múltiples caras de las sociedades latinoamericanas. Por lo mismo, esta revista termina diciendo que “el espantoso estado de las cosas en Chile nos sirve como un duro recordatorio de que tras el velo de los gráficos y las planillas de cálculo, gobernar sigue siendo un asunto profundamente político que requiere capacidades de estadista, no habilidades abstractas”.

En este contexto de desencanto y desconfianza, de gran deslegitimación de la política institucional (no de la socrática revivida en la “reciudadanización” de las personas) y de las condiciones objetivas de precarización de la población, es esperable que exigir un nuevo “esfuerzo extra” rebalse el vaso nuevamente. Por lo mismo, sino se empiezan a aplicar fuertes y ambiciosas políticas contracíclicas con endeudamiento y donde los más ricos asuman más, y se empiecen a manifestar transformaciones mayores del orden político y económico, las grietas en la región se van a ahondar y los soberanos, los movilizados el 2019, volverán a la calle porque ellos llegaron para quedarse tal como lo adelanta Daniel Linsker, de la consultora Control Risks.

(*) Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden-Holanda e Investigador del Programa de Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile.